

**SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA**

SUMILLA: Los lotes de terreno que vienen ocupando los actores no pueden ser materia de reconocimiento de derecho a su favor, por cuanto se tratan de bienes inalienables e imprescriptibles conforme a lo establecido en el artículo 73° de la Constitución Política del Estado y del artículo 1° de la Ley N° 26664, toda vez que los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo administración municipal, forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles.

Lima, veintinueve de noviembre
de dos mil diecisiete.-

**LA TERCERA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y SOCIAL
TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
REPÚBLICA:**

VISTA; la causa número tres mil ciento treinta y dos mil dieciséis, Del Santa; con los expedientes principal, administrativo formado por tres tomos y el cuaderno de casación; en Audiencia Pública llevada a cabo en la fecha, integrada por los señores Jueces Supremos: Pariona Pastrana, Vinatea Medina, Arias Lazarte, Yaya Zumaeta, y Cartolin Pastor; de conformidad con el dictamen de la Fiscalía Suprema Transitoria en lo Contencioso Administrativo y luego de verificada la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia:

I) MATERIA DEL RECURSO DE CASACIÓN:

Se trata del recurso de casación interpuesto por la **Municipalidad Provincial Del Santa**, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos setenta y seis, contra la sentencia de vista, de fecha ocho de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas ciento cincuenta y dos, que confirmó la sentencia de primera instancia de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos noventa y siete, que declaró fundada en parte la demanda.

**II) FUNDAMENTOS POR LOS CUALES SE HA DECLARADO
PROCEDENTE EL RECURSO:**

La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, mediante resolución de fecha cinco de agosto de

**SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA**

dos mil dieciséis, obrante a fojas cincuenta y cuatro del cuaderno formado en este Tribunal, ha declarado procedente el recurso de casación interpuesto por las causales de: **a) Infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 26664, que dicta disposiciones referidas a la administración de las áreas verdes de uso público;** sosteniendo la recurrente que la Sala de Mérito incurre en error de hecho y de derecho al confirmar la sentencia de primera instancia, ya que el dispositivo legal referido prescribe que lo destinado para áreas verdes, entre otros que indica, tiene carácter de intangible, inalienable e imprescriptible; sin embargo, ordena que la entidad edil emita pronunciamiento respecto de un argumento descrito por los demandantes en sede administrativa, esto es, la posesión de un área sobre la vía pública, cuando resulta evidente que tal situación contraviene el dispositivo legal citado, por lo cual fue declarado improcedente la solicitud de constancia de posesión, inobservado con ello el quebrantamiento del dispositivo legal citado; y, **b) de manera excepcional, conforme al artículo 392° – A del Código Procesal Civil por la infracción normativa de los incisos 3) y 5) del artículo 139° de la Constitución Política del Estado,** habiendo precisado dicha Sala Suprema que uno de los argumentos de la municipalidad demandada consiste en que el área en litigio está inscrita como aporte reglamentario para equipamiento urbano, de dominio público, inalienable e imprescriptible.

III) DEMANDA: Pretensión y fundamentos

3.1 Mediante el presente proceso, en lo principal, se declare la nulidad de la Resolución Gerencial N° 0176-2012-GO-MPS, de fecha diez de febrero de dos mil doce, emitida por la Gerencia de Obras de la Municipalidad Provincial Del Santa, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por Violeta Torres Sánchez y otros contra la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS. Como pretensiones accesorias, se declare la nulidad de la Partida Registral N° 11041090 denominada parcela F2; y se suspenda la orden de lanzamiento decretado por dicha Gerencia de Obras.

3.2 Como sustento de la demanda, señalan los actores que la Municipalidad Provincial Del Santa ha denegado su petición de ser declarados posesionarios de los lotes que ocupan; además ha ordenado el desalojo de dichos lotes. En

**SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA**

ese orden de exposición, refieren que Luis Alberto Ishikane Jiménez consiguió la expropiación de 13.9658 hectáreas del Predio Rural N° 00008321 (hoy Partida N° 02108321) con fines agrícolas; no obstante ello, mediante Resolución de Alcaldía N° 0791-2008-MPS de fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, se cambió el predio de rústico a urbano, de manera que no se cumplió el fin de la expropiación.

3.3 Con fecha uno de agosto de dos mil ocho, la junta de vecinos El Milagro adquirió el 7.2815% de las acciones y derechos del predio inscrito en la sección especial de predios rurales, por la suma de treinta mil con 00/100 (S/. 30,000.00) nuevos soles. Igualmente el señor Erasmo Vásquez Valverde también ha comprado acciones y derechos del citado bien; precisando que las ventas bajo referencia se han realizado sin las formalidades de ley, pues no se ha tenido en cuenta que los recurrentes son posesionarios y que las adquisiciones se han hecho en porcentaje y no con dimensiones exactas. Finalmente alegan los actores que no ocupan la parte del predio que ha sido adjudicada a la junta de vecinos El Milagro, por el contrario, han acreditado que tienen un solo lote y no tienen otros bienes, requiriendo que se les adjudiquen los lotes que ocupan, para que puedan llevar adelante la construcción de sus casas habitación.

IV) DECISIÓN ARRIBADA EN SEDE DE INSTANCIA: FUNDAMENTOS Y FALLOS

1. Sentencia de primera instancia

1.1 El Juez declara fundada en parte la demanda; en consecuencia nula la Resolución Gerencial N° 0176-2012-GO-MPS, de fecha diez de febrero de dos mil doce, que declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS y nula la Resolución de Alcaldía N° 0377-2012 de fecha veinte de marzo de dos mil doce, que declaró infundado el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución Gerencial N° 0176-2012-GO-MPS, debiendo la administración emitir nuevo pronunciamiento sobre el recurso de reconsideración interpuesto en sede administrativa y, como consecuencia de la vigencia de la Resolución Gerencial N° 308-2011-GO-MPS, se entienda suspendido todo mandato de lanzamiento; asimismo, improcedente

**SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA**

la demanda en los extremos que se solicita la declaración de nulidad de la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS de fecha dieciocho de febrero de dos mil once, que declaró improcedente la solicitud de constancia de posesión, así como improcedentes las pretensiones de declaración de invalidez de la inscripción realizada en la Partida N° 11041090 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chimbote, y de que se ordene a la Municipalidad Provincial Del Santa, otorgue a cada uno de los actores el certificado de posesión que han solicitado en sede administrativa; sin costas ni costos.

1.2 Como sustento de la demanda, señala el Juez que en la Resolución de Alcaldía N° 0377-2012, debió tenerse en cuenta el principio de congruencia por cuanto en el recurso de apelación se manifestó que no se puso en conocimiento los informes en que se sustentaba la decisión y no se tuvo en cuenta la prueba con la que se acreditó la posesión, de manera que se incurrió en vicio de nulidad insubsanable. Indica también, que al momento de transcribirse las conclusiones de los informes previos, en lugar de realizarse una motivación propia, al emitirse la resolución de alcaldía no se reparó en que se carecía de pronunciamiento respecto a la situación jurídica de los administrados y que por otra parte, no se analizó siquiera uno de los fundamentos centrales de la intervención de los actores en sede administrativa y ahora en sede judicial, la alegada condición de posesionarios con anterioridad a la inscripción del derecho del Asentamiento Humano El Milagro y, por tanto, con anterioridad a la determinación de las áreas que hoy conforman el equipamiento urbano.

1.3 El Juez señala que la Resolución Gerencial N° 0176- 2012-GO-MPS, en la que la administración se limitó a listar los informes dispuestos en la Resolución Gerencial N° 308-2011-GO-MPS, pero sin realizar ningún tipo de análisis, al punto de transcribir los fundamentos de la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS, lo que hace denotar que los informes sociales evacuados fueron de mero trámite; los hoy demandantes no obtuvieron una respuesta motivada a la impugnación interpuesta contra la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS y, por tanto, la demanda debe ser declarada fundada en parte, declarándose la

**SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA**

nulidad de la Resolución de Alcaldía N°0377-2012 y de la Resolución Gerencial N°0176-2012-GO-MPS.

1.4 El Juez indica que la solicitud de los demandantes, en sede administrativa, no tiene otro propósito que la adjudicación de determinados lotes de terreno, que solicitan los actores a la Municipalidad Provincial Del Santa, advirtiéndose que sobre la base de lo establecido en la Resolución Gerencial N° 308-2011-GO-MPS, corresponde a la Gerencia de Obras de dicha municipalidad, adoptar las medidas pertinentes a fin de dar una respuesta fundada en derecho a los actores, respecto a la totalidad de los agravios contenidos en el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS, resultando improcedente la demanda respecto de esta decisión administrativa, tanto más si los actuados volverán al funcionario administrativo que la emitió.

1.5 Asimismo, advierte que al volver el procedimiento administrativo al estado anterior a la emisión de la Resolución Gerencial N° 0176-2012-GO-MPS, supone la plena vigencia de la Resolución Gerencial N°308-2011-GO-MPS, por tanto, la suspensión de los efectos de la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS, entre ellos, la orden de lanzamiento; correspondiendo a la entidad administrativa emitir nuevo pronunciamiento sobre el recurso de reconsideración interpuesto por los demandantes; por lo tanto, deviene improcedente la pretensión de declarar la invalidez de la inscripción realizada en la Partida N° 11041090 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chimbote, y que se ordene a la Municipalidad Provincial Del Santa otorgue a cada uno de los actores, el certificado de posesión que han solicitado en sede administrativa. Finalmente, concluye que no ha sido materia del procedimiento administrativo, por un lado, el pedido de adjudicación y, por otro, que se retire a los demandantes de los terrenos que hoy ocupan, ya que no puede ser materia de discusión en el presente proceso, la validez de la Resolución Gerencial N° 194-2010-GO-MPS.

2. Sentencia expedida en segunda instancia

La Sala de Mérito confirma la sentencia apelada que declaró fundada en parte la demanda; sosteniendo el Colegiado que debe tenerse en cuenta que el Juez

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA

además de declarar fundada en parte la demanda, ha declarado también improcedente la misma en cuanto a la invalidez de la inscripción realizada en la Partida N° 11041090 y tampoco puede ser materia del presente proceso la validez de la Resolución Gerencial N° 194-2010-GO-MPS de fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, es decir, que la demanda ha sido declarada fundada en una parte e improcedente en otra parte, **teniendo en cuenta que la Municipalidad Provincial Del Santa, solamente se encuentra obligada a emitir nuevo pronunciamiento sobre el recurso de reconsideración interpuesto por los demandantes en sede administrativa y como consecuencia dejar vigente la Resolución Gerencial N° 308-2011-GO-MPS, suspendiéndose por tanto el mandato de lanzamiento, debido a que dicha municipalidad, no ha dado cumplimiento a lo establecido por el artículo IV numeral 1-1 del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, al no haber respetado el cumplimiento de dicho presupuesto legal en agravio de los administrados (demandantes).**

V) CONSIDERANDO:

PRIMERO: Proceso contencioso administrativo

Conforme al artículo 148° de la Constitución Política del Perú, las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante la acción contencioso-administrativa. Precisa Danós Ordóñez¹ que esta consagración constitucional del proceso contencioso administrativo cumple los objetivos siguientes: 1) Garantiza el equilibrio entre los poderes del Estado, pues permite que las decisiones de la administración pública, de cualquiera de los tres niveles de Gobierno, puedan ser revisadas por el Poder Judicial; 2) refuerza el principio de legalidad que fundamenta a la administración pública, pues todo acto administrativo debe ceñirse al ordenamiento jurídico vigente, lo cual debe ser verificado por el Poder Judicial; 3) consagra el derecho de los administrados a cuestionar las decisiones administrativas ante el órgano judicial competente, lo cual satisface el derecho a la tutela judicial efectiva; 4) establece una tácita reserva constitucional para que el control jurisdiccional de los actos

¹ Danós Ordóñez, Jorge. La Constitución Comentada. "Proceso Contencioso administrativo". Gaceta Jurídica. Tomo II. Primera Edición. Lima: 2005; pp. 702-703.

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA

administrativos sean exclusivamente a través del proceso contencioso administrativo; y, 5) no existen normas que excluyan a los actos administrativos del control jurisdiccional. Según Huapaya Tapia², *“Precisamente, el ordenamiento ha diseñado una serie o gama de medios de control de la actuación de la Administración Pública, destinados a garantizar y efectivizar su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Uno de estos medios es el denominado control jurisdiccional de la administración pública, y dentro de este rubro se posiciona el denominado proceso contencioso administrativo, como medio ordinario de control jurisdiccional de la actuación de la Administración Pública y del sometimiento de los fines que la justifican”*.

SEGUNDO: Bajo ese orden de exposición, y en mérito a lo reconocido en el artículo 45° de la Carta Fundamental, la Administración Pública ejerce poder con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen, evitándose con ello la arbitrariedad y del abuso del poder. A partir de ello, el Poder Judicial ejerce control jurídico sobre los actos de aquella. Por su parte, el artículo 1° del Texto Único Ordenado de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, aprobado por el Decreto Supremo N° 013-2008-JUS³, indica que la finalidad de la acción contencioso administrativo o proceso contencioso administrativo prevista en el artículo 148° de la Constitución Política, es el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la Administración Pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Como se observa, el proceso contencioso administrativo surge como la manifestación del control judicial que debe existir sobre las actuaciones de las entidades administrativas, entre ellas, los actos administrativos, el silencio administrativo y las actuaciones materiales administrativas, protegiendo al administrado frente a errores, de forma y de fondo, que pueden cometerse al interior de un procedimiento administrativo.

² Huapaya Tapia, Ramón. Tratado del Proceso Contencioso Administrativo, Jurista Editores, primera edición, mayo 2006, pp. 219-220.

³ T.U.O. Ley N° 27584: Artículo 1°.- Finalidad. La acción contencioso administrativa prevista en el Artículo 148° de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Para los efectos de esta Ley, la acción contencioso administrativa se denominará proceso contencioso administrativo.

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA

TERCERO: Derechos fundamentales a un debido proceso y a una tutela jurisdiccional efectiva

3.1 Al haberse declarado procedente el recurso de casación por causales procesal y material, corresponde en primer lugar el análisis de la denuncia de carácter procesal, conforme a lo establecido por esta Corte Suprema en la Casación N° 5278-2014-LIMA ⁴: ***“corresponde examinarlas bajo el marco jurídico de las garantías de los derechos fundamentales a un debido proceso, tutela jurisdiccional efectiva y a la debida motivación de las resoluciones judiciales, a fin de que se ejercite adecuadamente la finalidad esencial del recurso de casación, y se resguarde la tutela de los derechos procesales con valor constitucional, con la clara observancia de las normas sustantivas y procesales que garantiza al justiciable el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales una respuesta razonada y fundamentada, respetando los principios de jerarquía de las normas, el de congruencia procesal, la valoración de los medios probatorios”***.

3.2 Sobre el derecho fundamental a un debido proceso, el Tribunal Constitucional precisa⁵: *“(...) es un derecho –por así decirlo– continente puesto que comprende, a su vez, diversos derechos fundamentales de orden procesal. En ese sentido, afirma dicho órgano jurisdiccional que: “(...) su contenido constitucionalmente protegido comprende una serie de garantías, formales y materiales, de muy distinta naturaleza, que en conjunto garantizan que el procedimiento o proceso en el cual se encuentre inmerso una persona, se realice y concluya con el necesario respeto y protección de todos los derechos que en él puedan encontrarse comprendidos”*⁶. En ese contexto, podemos inferir que la vulneración a este derecho se efectiviza cuando, en el desarrollo del proceso, el órgano jurisdiccional no respeta los derechos procesales de las partes, se obvian o alteren actos de procedimiento, la tutela jurisdiccional no es efectiva y/o el órgano jurisdiccional deja de motivar sus resoluciones.

⁴ Sentencia de Casación N° 5278-2014-LIMA, de fecha 24 de junio de 2014; expedida por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú; en los seguidos por F. Hoffmann-La Roche A.G contra el Indecopi, sobre impugnación de resolución administrativa.

⁵ Expediente N° 03433-2013-PA/TC. Sentencia de fecha 18 de marzo de 2014; en los seguidos por Servicios Postales del Perú S.A. – Serpost S.A.; fundamento 3.

⁶ Expediente N° 7289-2005-AA/TC. Sentencia de fecha tres de mayo de dos mil seis; en los seguidos por Princeton Dover Corporation Sucursal Lima-Perú. fundamento 5.

**SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA**

3.3 Por su parte, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, exige que, cuando una persona requiera la protección de su derecho o de sus intereses legítimos, aquello sea atendido por los órganos jurisdiccionales mediante un proceso adecuado donde se respeten las garantías mínimas de los litigantes, esto es, de ambas partes en el proceso. *“(...) Ello es así, toda vez que no solo se busca la defensa de los intereses de la parte accionante sino también los del sujeto requerido, estando sus derechos también abarcados en la tutela abarca una serie de otros derechos expresamente señalados o implícitamente deducidos de aquel. En la doctrina, se ha señalado que este derecho abarca principalmente tres etapas: El acceso a los órganos jurisdiccionales, el cumplimiento de las normas y derechos que regula el debido proceso, y el de la ejecución de la resolución obtenida”⁷.*

3.4 Con relación al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, que forma parte del contenido esencial del derecho al debido proceso, garantiza que la decisión expresada en el fallo o resolución sea consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica, siendo exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, contenga los fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena. Esta garantía se respeta siempre que exista fundamentación jurídica, congruencia entre lo pedido y lo resuelto y, por sí misma, la resolución judicial exprese una suficiente justificación de la decisión adoptada. Su finalidad en todo momento es salvaguardar al justiciable frente a la arbitrariedad judicial, toda vez que garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.

3.5 En atención a lo expuesto, podemos establecer que la obligación impuesta por estos dispositivos legales a todos los órganos jurisdiccionales (incluidos los administrativos), es que atiendan todo pedido de protección de derechos o intereses legítimos de las personas, a través de un proceso

⁷ Sentencia de Casación Nº 5278-2014-Lima, de fecha 24 de junio de 2014; en los seguidos por F. Hoffmann-La Roche A.G contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - Indecopi, sobre impugnación de resolución administrativa.

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA

adecuado, donde no solo se respeten las garantías procesales del demandante sino también del demandado, y se emita una decisión acorde al pedido formulado, el mismo que debe ser consecuencia de una deducción razonada de los hechos del caso, las pruebas aportadas y su valoración jurídica; siendo además exigible que toda resolución, a excepción de los decretos, se encuentre debidamente motivada, conteniendo los fundamentos de hecho y de derecho, así como la expresión clara y precisa de lo que se decide u ordena.

CUARTO: Fundamentos de la Tercera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de la Corte Suprema

4.1 En primer término, este Supremo Tribunal conviene en precisar que conforme al artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil: *“el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia (...)”*. Respecto a la norma citada, Cavani⁸ sostiene: *“Si es verdad que el modelo de Estado Constitucional tiene por fundamento la dignidad, por fines la libertad e igualdad, y, como medios para conseguir estos últimos, la verdad y la seguridad jurídica, entonces el proceso civil debe ser pensado a partir de la persona humana y no del Estado (Cavani, 2014: p.173). Ello lleva directamente, a la conclusión de que la preocupación principal del Estado (como administrador, legislador y juez) es proteger o tutelar todas aquellas posiciones jurídicas que son discutidas en el contexto de un proceso”*.

4.2 Entonces, los órganos jurisdiccionales se encuentran obligados, conforme al derecho fundamental a un debido proceso, reconocido en el inciso 3) artículo 139° de la Constitución Política del Estado, a tutelar los derechos de las partes de forma efectiva y eficaz, lo cual ha ocurrido en el presente caso. Como se ha precisado, el derecho fundamental a un debido proceso abarca el derecho a la motivación escrita de las resoluciones judiciales, reconocido como derecho y

⁸ Cavani, Renzo. Código Procesal Civil Comentado por los Mejores Especialistas. Tomo I. Análisis y Comentarios artículo por artículo. Concordancias/Jurisprudencia/Referencias Bibliográficas. Gaceta Jurídica: 2016. Pág. 37. (cursiva nuestra).

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA

principio jurisdiccional en el mismo cuerpo legal, a través del cual se permite el acceso de las partes de un proceso al razonamiento lógico jurídico usado por los jueces de mérito para justificar sus decisiones y ejercer debidamente su derecho de defensa, cuestionando el contenido de la decisión arribada en la instancia. De esta manera, el Juez debe exponer los motivos que lo llevaron a la decisión final, debiendo existir conexión lógica entre los hechos narrados por las partes y las pruebas.

QUINTO: Motivación aparente de la sentencia de vista; y omisión conjunta y pormenorizada de los medios de prueba que obran en autos

5.1 Esta Sala Suprema verifica en sede de casación que efectivamente los jueces de mérito a fin de validar su decisión para declarar fundada en parte la demanda, han incurrido en motivación aparente e incoherente de las sentencias expedidas en sede de instancia, omitiéndose a raíz de ello una interpretación correcta de las normas conforme a derecho, la determinación de los hechos suscitados y una valoración conjunta y pormenorizada de los medios de prueba que obran en autos, corroborando este Supremo Tribunal de la Resolución Gerencial N° 0176-2012-GO-MPS, que se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto por Violeta Torres Sánchez y otros contra la Resolución Gerencial N° 0048-2011-GO-MPS, por cuanto se confirmó en sede administrativa que **el área sublitis se encuentra inscrita como aporte reglamentario para equipamiento urbano; precisándose además conforme a ley que el aporte reglamentario es de dominio público, inalienable e imprescriptible, es decir, no puede ganarse por la simple ocupación vía invasión, ni aun por posesión pacífica.**

5.2 En efecto, nótese del expediente administrativo que las Resoluciones N.ºs 0176-2002-GO-MPS, 308-2011-GO-MPS, 0048-2011-GO-MPS y 3777-2012 han sido expedidas conforme al contenido de los Informes Técnicos N.ºs 156-2010 y 5546-2010-DPyCU-DDU-MPS, obrante a fojas cincuenta y cuatro y ciento ochenta y dos del expediente administrativo, habiendo determinado la Administración Pública conforme al derecho fundamental a un debido procedimiento administrativo **que los lotes de terreno que vienen ocupando los demandantes se encuentran ubicados en la Parcela F-2 del**

SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA

Asentamiento Humano El Milagro, del distrito de Chimbote, provincia del Santa, Región Ancash considerados como parques y jardines de uso público de acuerdo al reglamento para equipamiento Urbano y Zonificación de la Municipalidad Provincial del Santa; corroborando esta Sala Suprema que los accionantes efectivamente vienen ocupando un área de terreno que según los instrumentos técnicos de zonificación de las Municipalidad del Santa están considerados como parque y jardín, es decir, un área destinada para uso público sobre la cual pretenden que la municipalidad demandada les otorgue las constancias de posesión de sus viviendas.

SEXTO: Sobre el carácter de los lotes de terreno submateria

6.1 Esta Sala Suprema conviene en reiterar que, del caudal probatorio y de los hechos suscitados y plasmados en los documentos presentados a lo largo de este proceso contencioso administrativo, los lotes de terreno que vienen ocupando los actores no pueden ser materia de reconocimiento de derecho a favor de los particulares, por cuanto se tratan de bienes inalienables e imprescriptibles conforme a lo establecido en el artículo 73° de la Constitución Política del Estado. Añádase que conforme al artículo 1° de la Ley N° 26664, los parques metropolitanos y zonales, plazas, plazuelas, jardines y demás áreas verdes de uso público bajo administración municipal forman parte de un sistema de áreas recreacionales y de reserva ambiental con carácter de intangibles, inalienables e imprescriptibles.

6.2 En consecuencia, se concluye que efectivamente se ha incurrido en infracción normativa del artículo 1° de la Ley N° 26664, toda vez que el área de terreno ocupado por los actores comprende un espacio de uso público destinado para áreas verdes, de acuerdo a los instrumentos técnicos de zonificación de la Municipalidad Provincial Del Santa; razones por todas las cuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 396° del Código Procesal Civil deviene en fundado el recurso de casación, debiendo casarse la sentencia de vista y actuando en sede de instancia revocarse la apelada; y reformándola, declararse infundada la demanda.

**SENTENCIA
CASACIÓN Nº 3130-2016
DEL SANTA**

VI) DECISIÓN:

Por tales consideraciones, declararon **FUNDADO** el recurso de casación interpuesto por la **Municipalidad Provincial Del Santa**, de fecha tres de diciembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos setenta y seis; en consecuencia **CASARON** la sentencia de vista, de fecha ocho de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas quinientos sesenta y cuatro; y, **actuando en sede de instancia: REVOCARON** la sentencia apelada de fecha veintiocho de octubre de dos mil catorce, obrante a fojas trescientos noventa y siete; y **REFORMÁNDOLA** declararon **INFUNDADA** la demanda; **DISPUSIERON** la publicación de la presente resolución en el diario oficial “El Peruano”; en los seguidos por **Juana Roxana Chafloque Gonzales y otros** contra la recurrente, sobre acción contenciosa administrativa; y, los devolvieron. Interviene como ponente el señor Juez Supremo **Vinatea Medina.-**

S.S.

PARIONA PASTRANA

VINATEA MEDINA

ARIAS LAZARTE

YAYA ZUMAETA

CARTOLIN PASTOR